



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, doce de agosto de dos mil veintidós

S22-131

Proceso: CONFLICTO DE COMPETENCIA
Demandantes: **PROTECCIÓN S.A.**
Demandados: **JUAN DAVID OTALVARO ARCILA**
Radicado No.: 05001-41-05-004-2022-00291-00
Decisión: **ENTREGAR EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO AL JUZGADO CIVIL
CON CONOCIMIENTO EN PROCESOS LABORALES DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE GIRARDOTA**

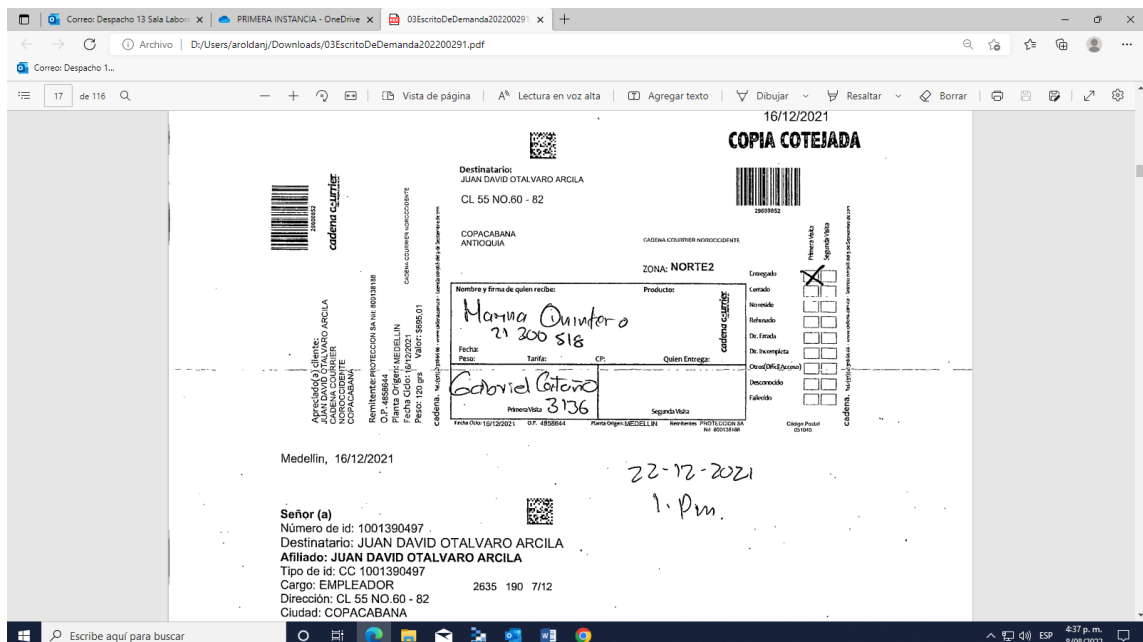
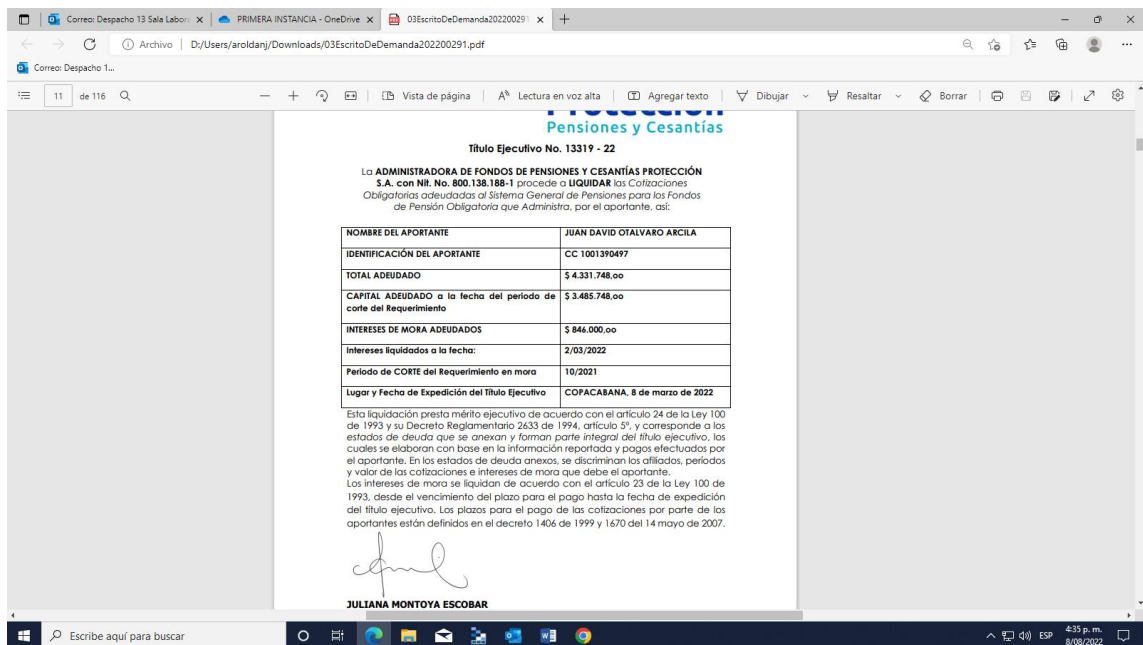
La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a decidir el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Civil del Circuito de Girardota con conocimiento en procesos laborales y el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 23** de discusión, que se adopta como auto, en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

Solicita Protección S.A. que se libre mandamiento de pago por la suma de \$3.485.748 por concepto de capital de la obligación a cargo del empleador JUAN DAVID OTALVARO ARCILA, domiciliado en Copacabana, por los aportes en pensión obligatoria, y que consta en el título ejecutivo que anexa, con base en lo normado en el artículo 24 de la ley 100 de 1993; además por la suma de \$846.000 por intereses moratorios a corte 2/03/2022, junto con los que se sigan causando.

Como base de recaudo anexan el siguiente título:



La presente demanda fue repartida al JUZGADO CIVIL CON CONOCIMIENTO EN PROCESOS LABORALES DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOTA, el que por auto del 30 de marzo de 2022 (fl. 113 del archivo 03 del expediente digital), declaró la falta de competencia para conocer el asunto. Expresamente indicó que:

Para determinar como primera medida si este Despacho es competente para conocer de la presente controversia, se hace necesario acudir a la providencia AL228-2021 emitida dentro del radicado N° 88.617 del 03 febrero de 2021 por la Corte Suprema de Justicia, en la que al dirimirse un conflicto de competencia suscitado entre los JUZGADOS DOCE y TERCERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS 113 CAUSAS

LABORALES DE BOGOTÁ y MEDELLÍN, respectivamente, oportunidad en la que se indicó lo siguiente:

“... aunque la legislación laboral no reguló con precisión la competencia para conocer del trámite de la acción ejecutiva del artículo 24 de la Ley 100 de 1993 para las administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, lo cierto es que el artículo 110 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social determina la competencia del juez laboral para conocer en asuntos de igual naturaleza, pero en relación al Instituto de Seguros Sociales, dentro del régimen de prima media con prestación definida.

Razón por la que en virtud del principio de integración normativa de las normas procedimentales es dable acudir a lo dispuesto en el artículo 110 ibidem que refiere que el funcionario competente para conocer de la ejecuciones promovidas por el ISS, con el objeto de lograr el pago de las cuotas o cotizaciones que se le adeuden, es el juez del lugar del domicilio de dicho ente de seguridad social o de la seccional en donde se hubiere proferido la resolución, título ejecutivo, por medio de la cual declara la obligación de pago de las cotizaciones adeudadas.

Es así como tal disposición determina la competencia del juez del trabajo en asuntos de igual naturaleza, es decir, en los que se busca garantizar los derechos a la seguridad social de los afiliados a través del cobro ejecutivo a los empleadores de aquellas cotizaciones que no fueron satisfechas oportunamente”.

La Alta Corporación en un caso similar, en providencia CSJ AL2940 -2019 reiterada en proveídos CSJ AL4167-2019 y CSJ AL1046-2020, explicó que el aludido adjetivo legal, es el aplicable al caso, porque para la época de expedición del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (año 1948), la única entidad administradora del Sistema de Seguridad Social lo era el Instituto de Seguros Sociales, mientras que con la Ley 100 de 1993, se originó la creación de diferentes administradoras de los subsistemas que lo integran, sin que se determinara tampoco, como se anunció precedentemente, en quién recaía la competencia para conocer de la ejecución por cotizaciones a la seguridad social insolutas, situación que como se dijo, sí estaba prevista en su momento para el ISS, y que en tal virtud, resulta ser la más cercana para el asunto.

Conforme a lo anterior y para el caso que nos ocupa, se tiene que el domicilio del ente de seguridad social que en este caso es Protección S.A, según se extrae del Certificado de Existencia y Representación legal es Medellín, y no se observa claridad acerca de la seccional en la cual se realizó el título ejecutivo; por lo que acorde a lo dispuesto de manera precedente, el competente para conocer del presente trámite es el Juez de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, en razón al domicilio principal de la sociedad ejecutante y del monto de las pretensiones.

En consecuencia, inobservados los criterios establecidos acorde al precedente jurisprudencial enunciado, en lo que tiene que ver con el pago de cotizaciones en mora al sistema, se debe DECLARAR LA FALTA DE COMPETENCIA, con la consecuente remisión del expediente a los JUZGADOS DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MEDELLÍN -REPARTO-.

Por su parte, el JUZGADO CUARTO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MEDELLÍN, por auto del 31 de mayo del año en curso, propuso el conflicto negativo de competencia, aduciendo que NO compartía la interpretación que le dio su homólogo a la premisa normativa y jurisprudencial en la cual cimentaba su decisión. Respecto de la aplicación del artículo 110 del C.P.T y de la S.S., con la finalidad de determinar la competencia para el conocimiento de procesos de naturaleza como el que hoy los convocaba, precisó que había

acatado todos los remitidos, de acuerdo a la jurisprudencia trazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la expedición del Auto AL2940-2019, oportunidad en la que señaló que:

“En el caso bajo examen, si bien no existe una norma en materia procesal del trabajo que consagre de manera clara y precisa la competencia para conocer del trámite de la acción ejecutiva del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, encaminada en esta oportunidad al cobro de cotizaciones al Subsistema de Seguridad Social en Salud, lo cierto es que por aplicación analógica conforme lo permite el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la regla que se adapta es la establecida en su artículo 110, puesto que determina la competencia del juez del trabajo en asuntos de igual naturaleza, es decir, en los que se busca garantizar los derechos a la seguridad social de los afiliados a través del cobro ejecutivo a los empleadores de aquellas cotizaciones que no fueron satisfechas oportunamente.

La citada norma señala:

Juez competente en las ejecuciones promovidas por el Instituto de Seguros Sociales. De las ejecuciones de que trata el artículo anterior y el 32 de la Ley 90 de 1946 conocerán los jueces del trabajo del domicilio del Instituto Colombiano de Seguros Sociales o de la caja seccional del mismo, que hubiese proferido la resolución correspondiente y de acuerdo con las reglas generales sobre competencia por razón de la cuantía.”

Debe precisarse entonces, que el transcrito precepto adjetivo legal, además, es el aplicable al caso, porque para la época de expedición del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (año 1948), la única entidad administradora del Sistema de Seguridad Social lo era el Instituto de Seguros Sociales, mientras que, con la Ley 100 de 1993, se originó la creación de diferentes administradoras de los subsistemas que lo integran, sin que se determinara tampoco, como se anunció precedentemente, en quién recaía la competencia para conocer de la ejecución por cotizaciones a la seguridad social insolutas, situación que como se dijo, sí estaba prevista en su momento para el ISS, y que en tal virtud, resulta ser la más cercana para dilucidar el presente conflicto.

De ese modo, pese a que el procedimiento de cobro de las cotizaciones en mora previo a la acción ejecutiva, se efectuó en los términos de los artículos 24 de la Ley 100 de 1993 y 2 y 5 de su Decreto Reglamentario 2633 de 1994 en Fundación – Magdalena, como se deduce de los documentos obrantes a folios 28 a 32 del diligenciamiento, de acuerdo con ese mismo material y conforme la norma transcrita, el juez competente para conocer del presente asunto es el Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Santa Marta, en razón al domicilio de la demandante, ya que cuenta con sucursal en esa ciudad, lugar desde el cual además se adelantó la gestión de cobro prejurídico señalada, y en el que se deduce se creó el título ejecutivo base de recaudo.”

Continúa el juzgado señalando que el despacho del Circuito de Girardota declaró su falta de competencia para conocer del proceso, pese a que el Título Ejecutivo No. 13319 - 22 que fue presentado por la ejecutante como sustento de la acción promovida, fue expedido en el municipio de Copacabana (Antioquia), razón por la cual aquel sí contaba con competencia para el conocimiento del proceso, teniendo en cuenta que según lo preceptuado en la norma, conocían los jueces del trabajo *del domicilio del Instituto Colombiano de Seguros Sociales o de la caja seccional del mismo que hubiere proferido la resolución correspondiente*. Reconoce que también tiene competencia para el conocimiento el proceso de ejecutivo, toda vez que del Certificado de Existencia y Representación legal de PROTECCIÓN S.A, aportado al plenario, se desprende que la entidad tiene domicilio en la ciudad de Medellín, pero ante la pluralidad de jueces competentes,

la parte ejecutante contaba con un fuero electivo, ejercido al radicar la demanda en el municipio de Copacabana.

2. CONSIDERACIONES

El artículo 15, literal b, numeral 5° del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social (CPTSS), modificado por el artículo 10 de la Ley 712 de 2001, prescribe que corresponde a las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial dirimir los conflictos de competencia que se presenten entre Juzgados del mismo Distrito Judicial.

Tenemos pues que la competencia se centra en distribuir entre los distintos jueces especializados las diferentes áreas de la actividad jurídica. Acatar la misma implica salvaguardar el debido proceso, pues sólo el juez instituido para ello puede dirimir la controversia previamente asignada a él por el legislador; con tal disposición, además, se protege el derecho a la forma, puesto que la actividad procesal debe desarrollarse de acuerdo con el rito previamente establecido en la ley. Por manera, entonces, que:

“...La legalidad del juez es una garantía vinculada con la idea de un juez con jurisdicción, cuya aptitud se determina con los distintos factores de competencia. “El principio del juez legal, su designación previa, es una de las normas básicas de un procedimiento judicial digno del hombre... Se hace justicia al caso, cuando los ordenamientos procesales han sido fijados previamente, y previamente han sido instituidas las personas encargadas de adelantarlos...”¹

En el presente caso la decisión de la Sala se centra en establecer cuál es el juez que cuenta con la aptitud legal para conocer de la demanda de conformidad con el factor territorial, para lo cual NO es factible remitirnos al fuero electivo dispuesto en el artículo 5^o2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social-CPT y SS- modificado por el artículo o de la Ley 712 de 2001 toda vez que en estricto sentido, no podemos hablar del lugar donde *se prestó un servicio*. Recuérdese que lo aquí pretendido por la administradora ejecutante es el pago de los aportes en mora al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones de los trabajadores de un empleador moroso, aquí ejecutado.

¹ AGUDELO RAMÍREZ, Martín, Introducción al Estudio del Derecho Procesal.

² “Competencia por razón del lugar. La competencia se determina por el último lugar donde se haya prestado el servicio, o por el domicilio del demandado, a elección del demandante”

El antecedente jurisprudencial, que curiosamente le sirve de fundamento a ambos despachos para declarar su incompetencia, es decir, el auto de radicación AL 2940-2019, analizó esta particularidad y determinó que como NO existía una norma clara y expresa, que permitiera establecer la competencia para conocer de las acciones ejecutivas que prevé el art. 24 de la Ley 100 de 1993, por analogía del art. 145 del C.P.T. y S.S., debía aplicarse el art. 110 del citado estatuto procesal, cuyo tenor es:

ARTICULO 110. JUEZ COMPETENTE EN LAS EJECUCIONES PROMOVIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. De las ejecuciones de que trata el artículo anterior y el 32 de la Ley 90 de 1946, conocerán los jueces del trabajo <jueces laborales del circuito> del domicilio del Instituto Colombiano de Seguros Sociales o de la caja seccional del mismo que hubiere proferido la resolución correspondiente y de acuerdo con las reglas generales sobre competencia por razón o cuantía.

En dicha oportunidad la Corte consideró viable dicha remisión pues ambas acciones buscaban garantizar los derechos a la seguridad social de los afiliados a través del cobro ejecutivo a los empleadores de aquellas cotizaciones que no fueron satisfechas oportunamente

Tal decisión fue reiterada en diversas providencias, entre ellas, en los autos CSJ AL1046-2020 y CSJ AL228-2021, y recientemente en el de radicación 89.209 donde con claridad determinó que *cuando se pretenda el pago de cotizaciones en mora al sistema, la competencia radica en el juez del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social o el de aquel donde se adelantaron las gestiones de cobro.*

En el último antecedente mencionado la colisión negativa de competencia se presentó entre un Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, el que cimentaba su postura en que la administradora demandante contaba con una agencia en la ciudad de Cali y allí se surtieron las gestiones de cobro de aportes en mora. Y por el otro, el Juzgado Laboral Municipal de Cali, el cual arguyó que, si el domicilio principal de la demanda era Bogotá y ahí se adelantó el cobro pre jurídico, tomaba relevancia la elección del demandante. La Sala de Casación Laboral concluyó que:

Y en este caso, se tiene que la parte accionante en su escrito inicial establece el factor de competencia a “la naturaleza del asunto, la cuantía y la vecindad de las partes” y su domicilio principal es Bogotá, de lo que puede entenderse sin lugar a equívocos que su **elección** se dio por esa ciudad, opción que encuentra respaldo en las disposiciones que regulan la materia y por lo que se debe respetar su preferencia.

Así las cosas, y ante dos jueces que cuentan con competencia para conocer del asunto, Medellín por ser el domicilio de Protección, y **Girardota por haberse adelantado las gestiones de cobro en Copacabana, prima la elección del demandante por esta última**, materializándose así el derecho de defensa y contradicción, además de principios como el libre acceso a la administración de justicia. En tal sentido, si el accionante hace uso de tales potestades, no le es dable al juez desprenderse del conocimiento del asunto porque existe otra autoridad que también puede conocer del asunto.

En consecuencia, concluye la Sala que de acuerdo con los criterios sobre determinación de la cuantía y del juez competente, y en el entendido de que las normas procesales son de orden público, y por consiguiente de obligatorio cumplimiento, y que en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, se tiene que el mandamiento de pago pretendido por la entidad, debe ser un asunto conocido por el Juzgado Civil con conocimiento en procesos laborales del Circuito Judicial de Girardota

Por tanto, será allí donde se devolverán las diligencias para que continúe con el trámite que corresponda.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN, SALA TERCERA LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE


PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín y el Juzgado Civil del Circuito de Girardota con conocimiento en asuntos Laborales, en el proceso ejecutivo laboral adelantado por PROTECCIÓN S.A. contra el señor **JUAN DAVID OTALVARO ARCILA**, asignándole la competencia al **JUZGADO CIVIL CON CONOCIMIENTO EN PROCESOS LABORALES DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOTA**, a donde se remitirá el expediente.

SEGUNDO- Notificar la presente decisión al Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín.


Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

(Firmas escaneadas)

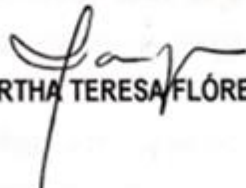
Los Magistrados,



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por
ESTADOS No. 143 fijados hoy en la secretaría de
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 12 DE AGOSTO DE 2022

Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>